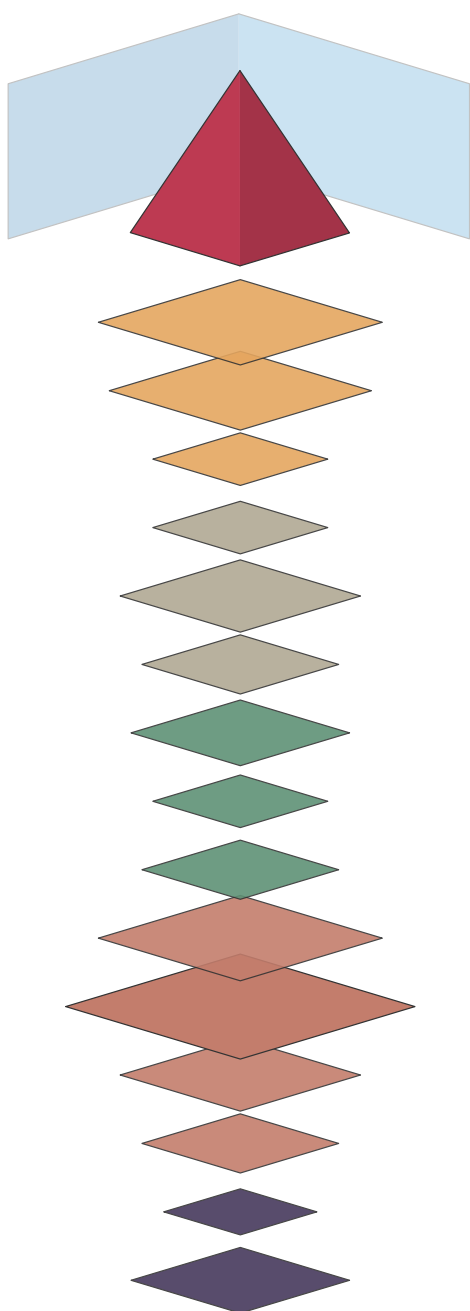


REPÚBLICA DOMINICANA



5,02
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

94.º de 193 países
20.º de 35 países americanos
4.º de 13 países del Caribe

MERCADOS CRIMINALES **5,13**

TRATA DE PERSONAS	6,50
TRÁFICO DE PERSONAS	6,00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	4,00
TRÁFICO DE ARMAS	4,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5,50
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4,50
DELITOS CONTRA LA FLORA	5,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	4,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	4,50
COMERCIO DE HEROÍNA	6,50
COMERCIO DE COCAÍNA	8,00
COMERCIO DE CANNABIS	5,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	3,50
DELITOS FINANCIEROS	5,00

ACTORES CRIMINALES **4,90**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	5,00
REDES CRIMINALES	5,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	5,50
ACTORES EXTRANJEROS	4,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	4,50

4,79
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

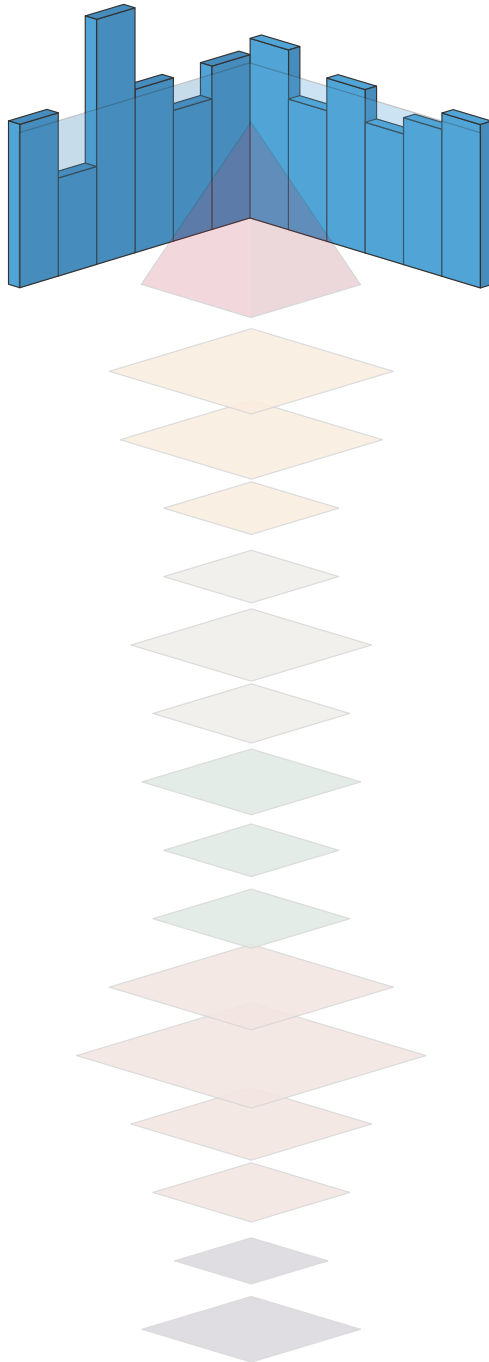


Financiamiento
proporcionado por el Gobierno
de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

REPÚBLICA DOMINICANA



4,79 PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

99.º de 193 países
21.º de 35 países americanos
11.º de 13 países del Caribe

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	5,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	4,00
PREVENCIÓN	4,50
ACTORES NO ESTATALES	5,00

5,02 PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

 MERCADOS CRIMINALES	5,13
 ACTORES CRIMINALES	4,90



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. El fenómeno adopta predominantemente la forma de explotación sexual, pero el trabajo forzado y la explotación con fines de trabajo doméstico, los matrimonios concertados y el reclutamiento en redes criminales son otras formas de trata que se dan en el país. Las víctimas de la trata de personas, ya sean nacionales o extranjeras en tránsito por la República Dominicana, tienen diversos destinos, la mayoría de las veces Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Las víctimas de otros países también pueden ser objeto de trata en la República Dominicana. En los últimos años se ha producido una afluencia de víctimas de trata venezolanas y haitianas, pero los ciudadanos colombianos también son vulnerables a la explotación en el país. Al igual que sus homólogas extranjeras, las víctimas de la República Dominicana suelen ser sometidas a trabajos forzados, generalmente en la construcción, la agricultura y el sector servicios, o a explotación sexual, principalmente en los complejos turísticos de playa del país. Los dominicanos son atraídos con engaños por redes que operan en todo el país. Dados los vínculos entre el sector turístico y la explotación sexual, es probable que gran parte del valor del mercado de trata de personas en el país se genere a través de la demanda extranjera.

La República Dominicana es un país de tránsito para los haitianos que se desplazan a América del Sur de forma irregular. También es un país de origen de migrantes objeto de tráfico ilícito hacia otros países de la región, como Chile, Estados Unidos y, en particular, el cercano Puerto Rico. Las actividades de tráfico de personas en la República Dominicana se ven favorecidas por factores como la posición geográfica del país, las crisis de Haití y Venezuela y la corrupción administrativa generalizada en el país. Los autores del tráfico de personas hacia y a través de la República Dominicana suelen pertenecer a redes radicadas en los países de origen de las víctimas, en particular grupos procedentes de Haití. El uso de documentación falsificada es una práctica habitual y los migrantes suelen ser transportados por mar, siendo más frecuentes los naufragios en las travesías marítimas. Estas rutas marítimas suelen ser las mismas que las utilizadas para otro tipo de delitos, como el tráfico de armas.

La extorsión ha aumentado considerablemente tras la pandemia de la COVID-19, con grupos internacionales de extorsión y con miembros dominicanos, que tienen como objetivo tanto a locales como a nacionales de España, Argentina y Estados Unidos.

TRÁFICO

La República Dominicana es un mercado de destino para las armas ilegales pequeñas y ligeras. Estados Unidos desempeña un papel considerable en el mercado de armas de la República Dominicana y los informes sugieren que los flujos de armas ilícitas se originan en Florida y entran en el país por mar. La porosa frontera con Haití es otro punto conocido de entrada de armas en la República Dominicana. En consonancia con las tendencias regionales, la República Dominicana presenta una alta incidencia de muertes por armas de fuego. Datos oficiales recientes muestran que el número de armas ilegales que circulan en el país sigue siendo notable, con aproximadamente tres armas traficadas ilegalmente por cada arma registrada. También hay indicios de que el personal militar y policial de la República Dominicana ha participado en el mercado delictivo de armas pequeñas y ligeras.

La República Dominicana es un lugar de producción y consumo de productos y mercancías falsificados, incluidos los productos farmacéuticos. Los medicamentos falsificados que entran en Estados Unidos proceden de países como la República Dominicana. La República Dominicana también está implicada en el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como los cigarrillos, que a menudo son utilizados por delincuentes internacionales como moneda de cambio, lo que provoca pérdidas de ingresos para el Estado. El contrabando de bebidas alcohólicas también es un problema desde hace años. Entre los extranjeros implicados en este mercado delictivo hay haitianos y chinos.

MEDIOAMBIENTE

Las principales formas de delitos contra la flora en la República Dominicana son la tala ilegal y el comercio ilegal de carbón vegetal. Se cree que estos productos ilegales de madera y de carbón circulan por toda la región. Además, la República Dominicana es un país de tránsito para la madera amazónica ilegal destinada a México y EUA y parece ser un país de destino para la madera ilegal procedente de Perú. Aunque el mercado de la madera es relativamente pequeño, existe un gran mercado de cactáceas, liliáceas y asfodeláceas, sobre todo de áloes, que se exportan a Estados Unidos. Aunque estas floras no están actualmente en peligro, el elevado volumen de comercio y la corrupción generalizada representan un posible problema futuro. La creciente escasez de flora en la República Dominicana ha provocado violencia, que se ha extendido a Haití, donde todavía hay abundancia. Además, los delitos contra la flora suelen desembocar en otras formas de actividad delictiva, como la explotación laboral y la evasión fiscal.

La República Dominicana es rica en biodiversidad y alberga muchas especies en peligro de extinción demandadas en el

mercado negro. Muchas especies de fauna, en particular las tortugas, se venden como recuerdo a los turistas y también existe una economía ilícita mayor en productos derivados de las tortugas marinas, como huevos, carne y caparazones. Otro producto rentable en la República Dominicana es la anguila americana, muy demandada en los países asiáticos, sobre todo con fines culinarios.

La República Dominicana es rica en diversos recursos no renovables y cuenta con numerosas minas de piedra caliza, arcilla y sal. En algunos yacimientos se practica la minería artesanal y no regulada. La República Dominicana también desempeña un papel importante en el mercado del tráfico ilícito de oro y actúa como país de tránsito para el oro ilegal de origen venezolano. El tráfico ilegal de oro venezolano es perpetrado por organizaciones y redes criminales transnacionales, que se dedican simultáneamente a otras formas de tráfico, como el narcotráfico.

DROGAS

La República Dominicana es un centro regional de tránsito de heroína y el principal destino de la que sale del país es Estados Unidos. También hay una creciente demanda interna y tanto los actores nacionales como los extranjeros obtienen beneficios del mercado.

La cocaína constituye el mayor mercado delictivo individual de la República Dominicana, que —se supone— es el principal centro de tránsito caribeño de cocaína procedente de Venezuela con destino a América del Norte o a Europa. La cocaína se importa principalmente en el país utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos. Desde la República Dominicana, los traficantes suelen dirigirse a Puerto Rico como puerta de entrada a Estados Unidos. Del mismo modo, Guadalupe, Martinica, Anguila, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas ofrecen oportunidades a los grupos de crimen organizado para enviar cocaína a Francia y el Reino Unido. Los traficantes también suelen dirigirse a España, donde existe una importante diáspora dominicana, lo que convierte a España en el principal punto europeo de entrada de la cocaína procedente de la República Dominicana. El consumo interno de drogas se concentra principalmente en las zonas metropolitanas y turísticas. El comercio de cocaína es el mercado de drogas más extendido en la República Dominicana; sin embargo, el cannabis es la droga más consumida en el país. El cannabis se introduce principalmente a través de la frontera terrestre compartida con Haití, donde se cultiva la droga, y desde Jamaica. Redes criminales, tanto de la República Dominicana como de Haití, colaboran en el tráfico de cannabis, que a menudo se importa al país en camiones, oculto entre otros productos.

Las drogas sintéticas, incluidos el éxtasis, el fentanilo y sus análogos, se fabrican en la República Dominicana. Además,

el país es un punto de transbordo de éxtasis, que pasa de sus países de origen (es decir, los Países Bajos y Bélgica) a América del Norte.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

El pirateo informático y el acceso ilícito a sistemas protegidos son los delitos dependientes de la cibernética más comunes. El número de intentos de ciberataques denunciados ha aumentado en los últimos años. En el 2022, los portales de más de una docena de instituciones fueron el objetivo de un grupo de hackers con base en otros países. Las organizaciones delictivas utilizan criptomonedas para blanquear dinero y estafar a particulares. La mayoría de los delitos cibernéticos ocurren a nivel transnacional, debido a las lagunas del sistema legal de la República Dominicana.

DELITOS FINANCIEROS

La República Dominicana tiene problemas con el fraude en la contratación pública, que ha aumentado considerablemente desde la pandemia de la COVID-19. Recientes descubrimientos indican un aumento de los niveles de malversación de fondos estatales, así como de estafas telefónicas llevadas a cabo por redes criminales ubicadas en el país, dirigidas a individuos tanto dentro como fuera del país. Esto también puede demostrar el potencial del mercado del fraude financiero en la República Dominicana. Los esquemas piramidales siguen representando un desafío en el país y demuestran cómo los medios electrónicos son utilizados por las redes criminales para robar identidades y estafar a las personas en la República Dominicana.

ACTORES CRIMINALES

Las redes criminales desempeñan un papel importante en los mercados de trata de personas, tráfico de personas y tráfico de drogas, así como en algunos de los mercados criminales más pequeños, como el mercado medioambiental o de recursos naturales. Los mercados delictivos de la República Dominicana dependen en gran medida de los vínculos transnacionales, incluidos los nacionales dominicanos que operan en el extranjero y los actores extranjeros que viven y operan en la República Dominicana. Estas personas suelen mantener un perfil bajo, mientras supervisan el transporte de los cargamentos de droga y la recogida y la repatriación de los beneficios. Las redes criminales de Haití trabajan en colaboración con las nacionales, especialmente en el tráfico de cannabis y en el transporte de madera ilegal. Además, el mercado del tráfico de personas también está predominantemente bajo el control de los cárteles haitianos.

Actores integrados en el Estado participan en diversas actividades delictivas, especialmente en el tráfico de drogas y en tramas destinadas a cometer blanqueo de capitales, sobornos y estafas al Estado. Se han dado múltiples casos



de participación de militares y policías en el narcotráfico y de vínculos entre narcotraficantes y altos funcionarios y políticos. Además, recientemente se han formulado acusaciones contra militares presuntamente implicados en asociaciones ilícitas, estafas, falsificación de documentos públicos, blanqueo de dinero y tenencia y porte ilícitos de armas.

En la República Dominicana, los grupos de tipo mafioso conocidos como «naciones» y «pandillas» están muy implicados en el panorama del crimen organizado. Los grupos más destacados son los Latin Kings, Los Trinitarios, los Bloods, Los 42, Metálicos, Ñetas, Mercaderos, Dorados y Rastafrys, entre otros. Estos grupos están presentes en las ciudades más grandes, tanto de la República Dominicana como de Estados Unidos, y se dedican a la venta de drogas al por menor, la extorsión, el chantaje y el blanqueo de dinero. Tienen una estructura jerárquica definida y centralizada

y son organizaciones con pocos miembros. Reclutan a jóvenes y utilizan altos niveles de violencia. La influencia de estas bandas puede haber disminuido en los últimos años. Sin embargo, siguen teniendo un control territorial significativo y a menudo tienen capacidad para prestar servicios dentro de sus territorios.

Los actores del sector privado implicados en actividades delictivas en el país participan sobre todo en planes de blanqueo de capitales, en los que se blanquean las ganancias obtenidas en operaciones ilícitas con sede en Estados Unidos. Estas empresas privadas colaboran a menudo con funcionarios o entidades públicas para introducirse en los mercados ilícitos. Los grupos delictivos implicados en el tráfico de drogas también suelen crear empresas, a menudo en el sector inmobiliario, con el único fin de blanquear los beneficios obtenidos mediante otras actividades ilegales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los dirigentes políticos de la República Dominicana han hecho declaraciones en las que advierten de las amenazas que plantea el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Aunque el país ha realizado algunas mejoras en materia de seguridad en el ámbito de la delincuencia comunitaria y en la lucha contra el narcotráfico, aún no es posible afirmar si estos esfuerzos han tenido éxito. La corrupción sigue estando muy extendida en la República Dominicana y las últimas administraciones gubernamentales no han logrado atajar la corrupción sistémica del país. El marco anticorrupción de la República Dominicana presenta deficiencias significativas, en particular la ausencia de una institución especializada dedicada a combatir la corrupción.

La República Dominicana ha demostrado su compromiso de cooperar con los esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado en el número de tratados y convenciones internacionales que ha ratificado. Existe una ley de extradición y acuerdos de extradición con EUA, Brasil, Panamá, México, Italia, España, Chile y Haití, así como con miembros de la Organización de Estados Americanos. Además, INTERPOL coopera con la Policía Nacional de la República Dominicana a través de su oficina en Santo Domingo. La República Dominicana también cuenta con legislación nacional dirigida específicamente a algunos mercados delictivos, entre ellos el tráfico de armas y el de drogas. Actualmente existe una propuesta para crear una normativa que permita extinguir la propiedad en casos de crimen organizado y corrupción. Sin embargo, la aprobación de esta propuesta ha resultado muy difícil, lo que demuestra lo problemático que resulta para el país

adoptar medidas legislativas eficaces para luchar contra el crimen organizado. Además, el país no parece disponer de una legislación nacional relativa específicamente a los grupos delictivos organizados y la pertenencia a un grupo delictivo organizado no está tipificada como delito.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque nominalmente independiente, el Poder Judicial sufre a menudo injerencias políticas, corrupción y falta de recursos y de personal adecuados. El sistema penitenciario de la República Dominicana ha cambiado recientemente, unificando las prisiones tradicionales y los centros de rehabilitación. Este nuevo modelo se propuso para garantizar programas más eficaces de rehabilitación y reinserción social para los reclusos. Sin embargo, las recientes peleas y reyertas dentro de las prisiones han llevado a los expertos a sugerir que no se han producido cambios estructurales en el sistema penitenciario. Asimismo, el hacinamiento en las prisiones sigue obstaculizando los avances en el establecimiento de sistemas de reinserción social.

Los altos niveles de corrupción suponen un reto para los cuerpos de seguridad de la República Dominicana. Sin embargo, se han producido algunas mejoras y la Policía Nacional ha creado unidades especializadas en narcóticos, trata de personas, fraude y ciberdelincuencia.

La situación geográfica del país a lo largo de las principales rutas del narcotráfico sigue siendo una fuente importante de vulnerabilidad. La frontera con Haití, en particular, sigue representando un punto histórico de tensión, así como un

punto de vulnerabilidad para la República Dominicana, con un volumen notable de flujos, tanto legales como ilícitos, a través de la frontera. La República Dominicana cuenta con un cuerpo terrestre especializado de seguridad fronteriza y también se han desplegado tropas regulares para ayudar a frenar el movimiento irregular de personas y el contrabando a través de la frontera. En cuanto a la protección del ciberespacio, se reconoce que la infraestructura tecnológica del país es vulnerable a los ciberataques y la información estatal está en constante peligro. La protección de los servicios digitales esenciales y la protección de datos personales es prácticamente inexistente y la lucha contra la ciberdelincuencia no ha mostrado avances.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A pesar de las recientes actualizaciones de la normativa nacional contra el blanqueo de dinero para cumplir mejor las normas internacionales, la corrupción, el amplio sector informal y la debilidad de los controles financieros hacen que el país sea vulnerable al blanqueo de dinero y a los flujos financieros ilícitos. El Gobierno intenta actualmente superar las deficiencias de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero parece que los riesgos de este tipo de delitos aumentan, en lugar de disminuir.

La República Dominicana tiene una de las mayores economías del Caribe y su crecimiento sostenido desde el 2014 ha llevado a una reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, sigue existiendo una importante economía informal arraigada en el país. La economía depende en gran medida del sector turístico. Sin embargo, los centros turísticos costeros del país son conocidos como focos de explotación sexual, con establecimientos que van desde bares y balnearios hasta playas, calles y parques públicos, todos ellos funcionando como zonas de captación y explotación.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Código Penal de la República Dominicana garantiza el derecho a la protección a las víctimas y a los testigos de delitos. El Gobierno ha puesto en marcha iniciativas para ayudar a los consumidores de drogas, mediante la introducción de un programa de sustitución de opiáceos y la introducción de alternativas al encarcelamiento para los delincuentes relacionados con las drogas. Sin embargo, existen deficiencias significativas en la respuesta del Gobierno a las víctimas de la trata de personas. No ofrece servicios especializados completos y suficientes a las víctimas de la trata de personas ni existen mecanismos para identificar eficazmente a las víctimas o derivarlas a centros de atención, una vez identificadas. Además, la ineficacia, tanto del Gobierno como de la Policía, a la hora de proteger y apoyar a las víctimas desincentiva la denuncia de los delitos. Mientras tanto, la persecución de estos delitos es ineficaz, lo que también hace menos probable que las víctimas los denuncien a los cuerpos de seguridad.

El Gobierno ha introducido estrategias de prevención de la delincuencia, como una Policía de proximidad, centrada en la prevención de la delincuencia y la seguridad pública. Además, funciona un programa de Policía juvenil comunitaria. Sin embargo, la República Dominicana ha tardado en establecer mecanismos de prevención, atención y rehabilitación para los consumidores de drogas. Tampoco ha puesto en marcha programas y estrategias eficaces ni ha mejorado los que tiene actualmente.

El país alberga muchas organizaciones activas de la sociedad civil y el Gobierno ha tomado medidas para ampliar el espacio en el que puede operar la sociedad civil. La libertad de prensa sigue estando a menudo socavada y muchos periodistas se autocensuran, por miedo a la violencia.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.